



Publicación del Movimiento Socialista de los Trabajadores - MST

\* La resistencia de ADEPCOCA.

\* Huelga general de Mineros de San Cristobal.

\* Entrevista a Henry Cayo Strio. Gral. Mina San Cristobal.

\* CNS en lucha por la anulación de la Ley 1189.

\* UMSA:  
El cogobierno entre opositores y el MAS

## BALANCE DEL GOBIERNO DE EVO MORALES



**PRO IMPERIALISTA, DERECHISTA  
CON RETÓRICA IZQUIERDISTA**

Foto: Página Siete

**EL MAS Y LOS INTERESES  
OLIGÁRQUICOS EN EL  
INCENDIO FORESTAL**



Foto: infobae.com



# LA RESISTENCIA DE ADEPCOCA



Foto: Exito Noticias

Es evidente que el Gobierno está decidido a aplastar a ADEPCOCA y acabar con la independencia político sindical de los campesinos. Por ello, desde el 2018 mantiene en la cárcel a su principal dirigente, Franklin Gutiérrez, y, en julio de los presentes consigue arrestar a Sergio Pampa y Saúl Tito, líderes del sector. Todos acusados de ser asesinos y ladrones, sin ninguna prueba. A esto se suma el asesinato de Miguel Coico, dirigente del Comité de Autodefensa de ADEPCOCA, que se produjo después de que las bases cocaleras encontraran en junio una planta de maceración de droga en territorios manejados por el MAS, ubicados en Trinidad Pampa. Denunciaron el hecho de inmediato, pero, no hubo mayor investigación del gobierno al respecto. Tras una asamblea paralela de los masistas, se resolvió descabezar al sindicato y llamar a elecciones. Horas después, se comete el asesinato. El gobierno mantiene a centenares de policías en el lugar, pero no para investigar las denuncias de narcotráfico ni el asesinato de Coico, sino, para amedrentar a las bases de ADEPCOCA y resguardar las reuniones y asambleas del sector afin al gobierno.

En el marco de estos ataques, quiso imponer una dirigencia paralela con el pequeño sector de sus llunkus. Comenzó poniendo pequeños mercados paralelos de coca, para debilitar el Mercado Tradicional de ADEPCOCA, puso uno en Chuquiaguillo y otro en el Sindicato Volantes Yungas, pero no se comparaban al mercado tradicional. Por ello, después del asesinato de Coico y el encarcelamiento de los dirigentes, los llunkus del MAS, de por sí y ante sí, designaron una nueva dirección cocalera encabezada por Elena Flores y se dispusieron a tomar las instalaciones del Mercado Tradicional y sindicato de ADEPCOCA. Pero, fracasaron por la fuerza de las bases

que impidieron el asalto. Producto de esto, abrieron otro mercado paralelo en instalaciones de lo que debía ser un hospital. A pesar de los ataques, las bases de ADEPCOCA no permiten que el gobierno y sus llunkus tomen por la fuerza su organización. Se mantienen en vigilia y al momento han logrado derrotar la pretensión de toma de sus instalaciones. Esto no es por casualidad, sino que se debe a que el movimiento de independencia sindical proviene desde la base y no de la burocracia. El gobierno no puede derrotarlos y se ve frustrado, por ello el odio a este sector. Pero, los ataques continuarán, por lo que es urgente defender a ADEPCOCA, exigir la libertad de los presos políticos, justicia para los asesinados que han caído por responsabilidad del gobierno, por el derecho para la tierra de los campesinos y la libre producción y comercialización de la hoja de coca, así como profundizar la independencia político sindical de la clase trabajadora. Para contrarrestar la política de aislamiento del gobierno, es urgente propagar la centralización de las luchas de todos los sectores. Para ello, es necesario recuperar la COB, la CSUTCB y todos los sindicatos de las garras del MAS.



Cocaleros queman credenciales de afiliados de Morales y Linera Foto: Los Tiempos



**CHASQUI SOCIALISTA**

Dep. Legal N° 4-3-114-04  
Teléfonos 70196952- 77518250  
e-mail: mstjsbolivia@gmail.com  
La Paz - Bolivia

**DIRECTOR GENERAL**

I. Jaime Vilela Gutiérrez

**DIRECTOR DE REDACCIÓN**

Juan José Villa S.

**EDICIÓN Y DIAGRAMACIÓN**

Fabiana M. Severich nuñez

**EQUIPO DE REDACCIÓN**

Israel Hurtado  
Omar Escobar  
Biendia Callancho  
Paola Cauna

# HUELGA GENERAL DEL SINDICATO MIXTO DE TRABAJADORES MINEROS SAN CRISTOBAL

Los obreros de la empresa Minera San Cristobal (MSC) han iniciado una potente lucha contra la patronal transnacional; han ganado un laudo arbitral para que se les paguen salarios dominicales, feriados trabajados y horas extras adeudadas desde el 2007, pero el gobierno no aplica el triunfo jurídico favoreciendo a la burguesía, situación que dilata la lucha de los mineros que desde el 18 de agosto se mantienen en huelga general.

El MST expresa su apoyo a la lucha del proletariado por el cumplimiento del laudo arbitral. A su vez, considera que se debe de impulsar la lucha histórica por la nacionalización de las minas, sin indemnización y bajo control obrero efectuado por la base. Para reflejar el carácter estratégico de la mina, de acuerdo a los datos del Comité Impulsor de Lucha Por la Democracia (CILD) distribuido por los trabajadores, la

MSC propiedad de la transnacional SUMITOMO, es la segunda empresa económica más grande de Bolivia, después de YPF. En los últimos años tuvo grandes ingresos por venta de concentrados de mineral: Bs. 3.949 millones en 2016 y Bs. 5.602 millones en 2017; de los cuales las utilidades netas fueron: Bs. 829 millones en 2016 y Bs. 1.326 millones, 2017. Esta producción y ganancias son realizadas por 834 obreros y 578 empleados. El Laudo obliga a la MSC a cancelar a cada trabajador unos Bs. 150 mil, lo que hace una deuda total aproximada de Bs. 125 millones, menos del 10% de las utilidades del 2017.

A continuación, reproducimos la entrevista hecha por el Chasqui Socialista al Secretario General del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros San Cristóbal, Henry Cayo, en medio del campamento ubicado en los alrededores del Ministerio de Trabajo.



Foto: J.S. Israel Hurtado

## ENTREVISTA CON HENRY CAYO SECRETARIO GENERAL SINDICATO DE MINEROS DE SAN CRISTÓBAL ¡EXIGIMOS EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL!

Por. Jaime Vilela Gutiérrez

**Chasqui Socialista (ChS).**- ¿Qué respuesta les dió el Gobierno a través del Min. de Trabajo?

**Henry Cayo (HC).**- Lamentablemente como empresa transnacional tiene injerencia política dentro del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha coadyuvado para poder llevar este proceso a favor nuestra, pero la intromisión política del ministro de Minería Cesar Navarro y el Ministro de Justicia Héctor Arce, son quienes indican que este Laudo arbitral no debe salir a favor de los trabajadores, bajo esa línea, el señor Vice-ministro de trabajo, el Dr. Ivan Bascopé, sigue queriendo anular el Laudo Arbitral.  
**CHS.**- ¿Qué exigen a las direcciones de la FSTMB y de la COB?  
**HC.**- La Federación de Mineros está en la obligación y es su deber velar el problema laboral. Si bien estos años no hemos tenido una huelga pidiendo el respeto de los problemas laborales, ahora ya es hora, la Federación tanto la COB deben abocarse al tema laboral. Está bien, se han dedicado al tema político, pero también que más se abo-

quen al tema laboral, no es solo San Cristóbal, están las empresas mineras: Tierra SA, Amayapampa y La Chojlla. Deben direccionar por lo que es la clase trabajadora.  
**CHS.**- ¿Debería la COB y la FSTMB mantener su independencia política de clase?  
**HC.**- Sí, si bien antes la COB y la FSTMB veían ese tema laboral, eran más contestatarias, ahora no; ahora se basan en el documento político que ha sido aprobado en San Cristóbal en el congreso de la FSTMB y posteriormente en el congreso de la COB en Santa Cruz. En ese marco se están abocando a lo que es el tema político. Pero debería haber cierta distancia.  
**CHS.**- ¿Cree que el actual Gobierno es un Gobierno de los trabajadores?  
**HC.**- En cierta manera Evo Morales ha favorecido un solo sector, a los cocalleros, pero por otro lado se ha olvidado de otros sectores como el sector minero, puede ser que represente, pero el que está ordenando que se vulneren nuestros derechos es el Ministro Cesar Navarro y Héctor Arce, no puedo decir que sea de Evo Morales o no, pero hay una negociación con las em-

presas transnacionales como hace el Ministro de Minería. No responde a lo que es la defensa de nuestros derechos laborales.  
**CHS.**- ¿Qué le pide a la ciudadanía para lograr la victoria?  
**HC.**- Pedirle disculpas al pueblo paceño. No es perjudicar, molestar, es hacernos escuchar. El Ministerio de Trabajo es una cartera de debe hacer cumplir la legislación laboral, es huelga legal, se sacó Resolución Ministerial. Llamo a la solidaridad de clase para que se respete los derechos laborales, a quienes han sufrido vulneraciones laborales hacer llegar a la clase trabajadora.



Foto: MST Jaime Vilela



## BALANCE DEL GOBIERNO DE EVO MORALES:

# PRO IMPERIALISTA, DERECHISTA CON RETÓRICA “IZQUIERDISTA”

El tercer período del Gobierno de Evo Morales se ha caracterizado por el crecimiento económico de la burguesía y élite oligárquica, así como por la creciente protesta de la clase trabajadora que recibió una constante represión estatal. En síntesis, estabilidad para la burguesía, crisis para los trabajadores. El presente texto es un balance condensado del último período del Gobierno.

## ORDEN BURGUÉS

Cuando Evo Morales dijo en su discurso del 6 de agosto: “no quiero ser el mejor Presidente de Bolivia, quiero ser Presidente de la mejor Bolivia de nuestra historia” omitió decir que esa mejora es solo para la burguesía y que para llegar a eso su tarea es controlar a los trabajadores, aplastar sus protestas.

Desde el 2014, la crisis económica mundial golpeó a Bolivia con el bajón del precio de las materias primas, especialmente petróleo y gas. Comenzó un ajuste para los trabajadores (cierre de fábricas, despidos, cobro de impuestos, entre otros), pero, el gobierno no permitió que la crisis afecte a la clase dominante, sus ganancias no dejaron de crecer.

De acuerdo al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Arce Catacora, con el gobierno de Mesa en el 2005 las ganancias ascendían a 900 millones de dólares. El 2014, con Evo Morales han superado los 4 mil millones de dólares, monto que se va incrementando anualmente y en pleno impacto de la crisis económica. Respecto a las ganancias de 2018, Álvaro García Linares dio la cifra en moneda nacional: 29,392 millones de bolivianos (4,229 millones de dólares). Este festín no es para el pueblo trabajador, sino solo para las petroleras, mineras, banca privada, agroindustria y todos los monopolios imperialistas que saquean el país.

Respecto al latifundio, que está íntimamente ligado a la agroindustria transnacional, el gobierno se ha comprometido a ampliar la frontera agrícola de la oligarquía en por lo menos un millón de hectáreas hasta el 2020. En julio de los presentes, ha lanza

do el Decreto Supremo N°3973 que actúan junto a la ley N° 741, autoriza la quema de monte en Santa Cruz y Beni. Esto produjo el incendio forestal más grande de la historia del país en áreas de la Chiquitania, Amazonía y El Pantanal. Se han perdido más de medio millón de hectáreas y hasta la fecha el fuego continúa ardiendo. El rechazo a declarar Zona de Desastre y la demora en apagar el incendio no son una negligencia gubernamental, sino una política consciente para impactar áreas protegidas en favor de los monopolios.

No es casual que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), órganos financieros del imperialismo, le feliciten constantemente por la política económica que viene aplicando en el país. Sin duda, Evo Morales ha hecho una gran gestión, pero para la clase dominante, que no tiene nada que ver con el pueblo trabajador.

## CRISIS ECONÓMICA

Mientras crecen las ganancias de la burguesía, el país experimenta un alarmante déficit fiscal que el 2018 llegó al -8,1% respecto PIB, lo cual contradice el supuesto crecimiento económico del país. Es el déficit más grande de América Latina hasta la fecha (incluso, superior a la Argentina que tiene -5,9%). Esto significa que el gobierno gasta más de lo que ingresa en las cuentas fiscales, pero no para resolver las reivindicaciones populares, sino para la burocracia estatal a su servicio, en la compra de dirigentes obreros y campesinos que traicionan a sus bases, en la campaña electoral con millonarios pagos a medios de comunicación y lo demás se pierde en una creciente corrupción.

Junto a esto, el oficialismo aplica otra respuesta a la crisis; la de seguir la política del FMI y BM: acrecentar la deuda externa para tapan los huecos deficitarios momentáneamente. Favorita receta del imperialismo para los países de la región. Tomando los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la deuda externa en el 2005 ascendía a los 4,942 millones de dólares, ahora, en 2019, asciende a 10,302 millones

de dólares. Y seguirá subiendo.

¿Quién pagará el déficit y la deuda? El gobierno se encarga de que la paguen los trabajadores, con impuestos, inflación, despidos y represión. La burguesía está protegida.

Esto justifica los ataques que ya se aplicaron contra la clase trabajadora tanto en la represión de protestas como en disminución del poder adquisitivo salarial y el deterioro de la calidad de la canasta familiar, como ya auguraba el ministro Arce Catacora, al señalar en mayo una canasta sin carne, arroz ni papel higiénico. Llamando en los hechos a ajustarse el cinturón a los trabajadores.

A esto se suma el incremento del desempleo en jóvenes con una tasa oficial del 8%. El trabajo informal que asciende al 55% profundizando la inestabilidad laboral. El cierre de empresas estatales como ENATEX, ECOBOL, entre otros, y, de acuerdo a datos de FUNDEMPRESA, también se registra el cierre de centenares de pequeñas empresas que no pueden competir con los monopolios. Esta situación económica perfila una agudización de la crisis en el próximo período, y, por ende, mayores ataques al sector obrero, campesino, indígena y popular.



En la imagen Evo firma acuerdo de libre exportación

**LA OFENSIVA ANTIOBRERA-POPULAR-CAMPESINA**

Para poder mantener las ganancias de la burguesía, el gobierno tuvo que atacar a los trabajadores. El 2014 compró a la burocracia sindical y destruyó el Instrumento Político de los Trabajadores (IPT) de la COB que surgía como alternativa obrera. El 2016, cerró la fábrica textil Enatex reprimiendo duramente la protesta fabril. Mismo destino sufrieron los trabajadores de ECOBOL, entre otros. En Huanuni, centenares de mineros fueron despedidos y otros sufrieron la jubilación forzosa que los retiró de su fuente laboral antes de tiempo, negándoles su derecho al trabajo. Los que quedaron, viven amenazados con el cierre de la empresa por déficit económico, son sometidos al incremento del tiempo e intensidad de la jornada laboral (Plusvalía absoluta y relativa).

A inicios del 2019, surgió un movimiento de centenares de desempleados exigiendo trabajo en la Empresa Minera de Huanuni. La respuesta gubernamental fue la represión policial y, peor aún, militar. Etiquetó al movimiento de “jukus” (ladrones de mineral) y con la patraña de que la mina está en peligro, militarizó el sector con el aval de la burocracia sindical (frente Oro). Hoy en día, los militares controlan el sector y han asesinado a distintos desempleados, entre ellos a un menor de edad, todos acusados de ser “ladrones”, sin investigación ni juicio.

A su vez, los obreros de la empresa Minera San Cristobal (MSC) han iniciado una po-



Foto: APG

tente lucha contra la patronal transnacional; han ganado un laudo arbitral para que se paguen salarios deudados desde el 2007, pero el gobierno no aplica el triunfo jurídico favoreciendo a la burguesía, situación que dilata la lucha de los mineros que desde el 18 de agosto de 2019 se mantienen en huelga general. Situación que es compartida por trabajadores de la mina Tierra S. A. y de la Mina Chojlla.

Mientras tanto trabajadores en salud y médicos mantienen una huelga general en petición de más ítems, equipamiento, la abrogación de la ley 1189 y su incorporación a la ley general del trabajo. Denuncian que existen más de 4000 médicos sin fuente laboral sólo en la ciudad de La Paz.

En el sector campesino, mantiene una brutal represión y persecución política a los cocaleros de los Yungas organizados en el sindicato de ADEPCOCA. El gobierno pretende erradicar su fuente de trabajo e ingresos, la producción de Hoja de Coca. Sus principales dirigentes, Gutiérrez y Pampa, están presos con acusaciones inventadas por el oficialismo, sin pruebas. Las bases cocaleras resisten embestidas delincuenciales provenientes de sectores ligados al gobierno que también estarían ligados al narcotráfico. Protegidos por el gobierno, los oficialistas están directamente implicados en el asesinato del dirigente del Comité de Defensa de ADEPCOCA, Miguel Coico.

Se suman ataques a las universidades reduciendo su presupuesto y atentando con acabar con la autonomía. De la última gran lucha de la UPEA, la policía asesinó a un

estudiante y aún se busca justicia. Continúan ataques a los maestros, a los pueblos indígenas con la construcción de la carretera por el TIPNIS, pasando por alto la movilización que años atrás ganó el respeto a su territorio y área protegida. Se encuentra también el incendio forestal que atenta al medio ambiente por ampliar la frontera agrícola para la oligarquía, por enumerar algunas de tantas embestidas del gobierno. Estos ataques son propios de un gobierno de orden burgués, de uno de derecha naturalmente alineado con el imperialismo.

**RASGOS BONAPARTISTAS Y FRAUDE ELECTORAL**

El gobierno ha ido asumiendo rasgos bonapartistas expresados en la concentración progresiva del poder en el ejecutivo, el dominio de la Asamblea Legislativa y la manipulación del poder judicial. El desconocimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero y el pisoteo selectivo de leyes de la propia Constitución burguesa para conseguir su cuarta reelección, van en ese sentido.

Para conseguir mantenerse en el poder, el gobierno prepara un fraude electoral para las presidenciales de octubre que se evidencia en el control total que tiene sobre el Tribunal Supremo Electoral y en la manipulación del padrón electoral con el registro irregular de votantes en el campo. A pesar de las denuncias y videos que demuestran las irregularidades, la política de fraude continúa campante. A esto se suma el control creciente que tiene sobre los medios de



on agroindustriales 2017 FOTO: ABI

comunicación. Todos los candidatos de la derecha le hacen el juego a su política de fraude y se presentan a sus elecciones.

Si bien el régimen actual aún no se ha consolidado como régimen dictatorial, la política de fraude se enmarca en sus rasgos bonapartistas. El hecho de que no haya podido dar el salto bonapartista antes se debe en esencia a la movilización de masas. En el 2017 y 2018 quiso dar el salto con la aprobación de un Nuevo Código Penal represivo, pero la COB encabezó una masiva protesta que le sentó la mano.

Sin embargo, la dinámica del gobierno sigue contemplando esa posibilidad. Actualmente, aún se constituye en un régimen de reacción democrática o democracia colonial, de aquella que, manteniendo mínimos resquicios democráticos, pisotea a la vez sus propias normas y CPE burguesas, desarrolla fraudes electorales, gobierna para el imperialismo y evita la representatividad política del pueblo trabajador absorbiendo a los partidos políticos al Estado Burgués semicolonial, financiando su organización. En definitiva, de su primer período al tercero, el Gobierno ha girado tanto a la derecha, que dejó de ser un mediador de conciliación de clases, para pasar a ser un gobierno de orden burgués directo, con rasgos bonapartistas y solo retórica “izquierdista”.

### RESPUESTA DE LA CLASE TRABAJADORA

Los trabajadores han respondido a los ataques del gobierno con luchas en las calles. Las reivindicaciones fueron centralmente económicas pero lograron ir agudizándose hasta plantear la recuperación de sus organizaciones sindicales de las garras del MAS. Este proceso de agudización de luchas duró casi todo el tercer período del gobierno. Se expresó en la pérdida de apoyo del gobierno en sectores de la revolución de octubre, en el occidente boliviano, y finalmente desembocó en la derrota del MAS en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

Luego, se desarrolló la lucha de los fabriles de Enatex por recuperar su empleo, de las personas con discapacidad por su situación económica, los universitarios por mayor presupuesto para educación (con la UPEA a la cabeza), el movimiento de cocaleros por defender la producción de hoja de coca junto a la independencia de su organización sindical, ADEPCOCA; los campesinos de ACHACACHI que expulsaron alcalde

oficialista por corrupto, la movilización de trabajadores en salud, hasta llegar a su cúspide a finales de 2017 e inicios de 2018, con la movilización de todos los sectores para derrotar el Nuevo Código Penal del Gobierno.

Esta agudización puso a la Central Obrera Boliviana (COB) nuevamente a la cabeza de la movilización de masas, incluida la clase media golpeada por el gobierno. Fortalecida por la política de centralizar la lucha a partir de la coordinación entre COB, ADEPCOCA y UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) – línea impulsada por el MST JS- el ente matriz de los trabajadores convocó en enero de 2018 a 3 movilizaciones nacionales, y con eso derrotó el código penal del gobierno.

La realidad planteó recuperar la COB de una vez por todas de las garras del MAS. Se realizaron asambleas nacionales obreras en Potosí y Cochabamba en camino de recuperar la independencia de clase, los trabajadores se sentían fortalecidos por la reciente victoria. Pero, lamentablemente, la burocracia sindical retrocedió y dilató la organización del Congreso de la COB. Permitió que el gobierno se adelantara e hiciera un congreso de sus burócratas llunkus en febrero de 2018. Así, se impuso otra dirigencia vendida al MAS con Juan Carlos Huarachi a la Cabeza. La dirección de la COB saliente no opuso mayor resistencia a pesar de las victorias obtenidas.

Esto hizo que la agudización en favor de la clase obrera se distienda. La centralización perdió fuerza y el gobierno comenzó a dividir las luchas a partir de su dominio de la dirección de la COB. Sin embargo, las protestas no se detuvieron, no hubo un aplastamiento del movimiento de masas. ADEPCOCA, ACHACACHI, los trabajadores de salud, médicos, maestros, estudiantes universitarios (a la cabeza de la UPEA),

mineros, desempleados, entre otros, continuaron llegando a la sede de gobierno exigiendo respuesta a sus reivindicaciones. Actualmente, los mineros de San Cristóbal en huelga general y los obreros de TIERRA S.A encabezan las luchas por salario y derechos laborales.

Si bien el gobierno evitó la unificación de los sectores, las luchas no han dejado de darse; volverán a acrecentarse por la crisis económica, el ajuste gubernamental y la represión. De hecho, a pesar del desvío electoral del MAS, las marchas y bloqueos en la sede de gobierno no esperan elecciones.

### POR UNA ALTERNATIVA DE INDEPENDENCIA DE CLASE

Sigue siendo imprescindible la lucha por la alternativa obrera, campesina, popular e indígena. Para ello es imprescindible recuperar la COB, la CSUTCB y todas las organizaciones de trabajadores de las garras del MAS.

Por un programa de verdadera nacionalización de los recursos naturales bajo control de bases obreras, la eliminación del latifundio, estatización de la banca, el no pago de la deuda externa, derecho a la autodeterminación de los indígenas y respeto a las áreas protegidas, acabar con el saqueo de las transnacionales y expulsar definitivamente al imperialismo.

Programa que ningún gobierno burgués podrá cumplir por su sometimiento a la economía y política imperialista, ni Evo ni Mesa, ni Ortiz ni los otros que se presentan a estas elecciones, solo un gobierno de la clase obrera junto a campesinos, indígenas y sectores populares podrá hacerlo. De ahí la importancia de construir la alternativa con independencia de clase en camino de retomar la revolución de octubre de 2003. Una tarea en la que el MST JS se mantiene inmerso e invita a las bases trabajadoras a unirse para construirla juntos.



Foto: ABI



## CNS EN LUCHA POR LA ANULACIÓN DE LA LEY 1189

La CNS ha rebasado su capacidad en un 279% , ya que, con casi 4 millones de afiliados, apenas cuenta con 3,594 médicos. Es decir, un médico debe atender a 1,053 pacientes. No abastece.

El 2018, las autoridades de la CNS desarrollaron “El Plan Nacional de Desarrollo Institucional” con el objetivo de construir 67 hospitales. Un año después, el 17 de junio, el Gobierno, a solicitud del ejecutivo de la COB, Huarachi, promulgó la Ley 1189 que “autoriza” la construcción de los hospitales así como la “inversión” de Bs. 3.600 millones para ese proyecto, pero, todo con recursos de los afiliados.

La Ley establece que el financiamiento para la implementación y funcionamiento de los nuevos hospitales debe provenir de recursos específicos de la CNS y de los intereses generados por una inversión obligatoria del 30% de sus saldos de caja en bonos del Estado.

Esto último demuestra que la CNS no cuenta con recursos para garantizar el funcionamiento de los futuros hospitales, por lo que

la ley les obliga a “invertir” en bonos.

La Ley también establece la modalidad de contratación “llave en mano”, que es la contratación directa, a dedo, de empresas constructoras, facilitando la corrupción. Actualmente, existen denuncias de sobrepresos en el presupuesto de los 67 hospitales donde están involucradas las autoridades de la CNS, mismas que son parte de la burocracia sindical afín al MAS.

Huarachi solicitó la creación de la ley 1189 para garantizar que el gobierno no aporte ni un solo centavo para la salud de los trabajadores, ni para la construcción de los hospitales y menos para su funcionamiento; la ley solo garantiza que el dinero de los afiliados sea gastado en sus proyectos, algo absurdo para lo que no se necesitaba una ley. Lo nuevo es que exige a la CNS gastar el 30% del dinero de trabajadores en la compra de bonos del Estado.

Bajo las reglas de la Ley 1189, los 67 centros médicos serán edificaciones vacías, que sirven para el discurso electoral oficialista derrochando recursos de los afiliados.

Por esta razón, salud se encuentra en movilización, exigiendo la anulación de la ley 1189. Mientras, la burocracia de la COB expulsa a dirigentes de CASEGURAL de la central, como represalia.

Para resolver esta crisis es necesario encarar la lucha por el incremento de presupuesto, para afrontar como mínimo, el déficit del 279%. Este dinero debe salir del Gobierno y la patronal, no del bolsillo de los trabajadores, esa es la lucha que debería encarar la dirigencia de la COB en lugar de defender una ley entreguista.

Para ello, es urgente organizar a la base trabajadora de afiliados, funcionarios en salud y médicos, por mayor presupuesto por un seguro de salud digno y de calidad.

En ese camino, hay que barrer con la corrupción interna, expulsando del seno de la CNS a las autoridades masistas impuestas por el Gobierno en complicidad con la burocracia sindical traidora.

Por la recuperación de la dirección de la COB luchando desde el interior de los sindicatos por la independencia de clase.

## UMSA: EL COGOBIERNO ENTRE OPOSITORES Y EL MAS

En medio del incendio forestal en la Chiquitania, el rector de la UMSA apenas sacó un comunicado de rechazo a la quema de monte que permite el MAS. Lo hizo con retraso, después de casi un mes de que el fuego consumiera los bosques. Siendo autoridad de una institución con tradición de lucha, se esperaba que tome acciones contundentes, pero, no fue así. Simplemente, se unió a la campaña del MAS de recolectar donativos sin afectar la política oligárquica, que es la responsable del incendio por ampliar la frontera agrícola de latifundistas y transnacionales. No llama a ninguna movilización, menos a asamblea de bases. Esta actitud no es casual. El rector viene cogobernando con el MAS al interior de la UMSA. Por fuera, se opone, pero por dentro, es un peón más del poder establecido. EL Consejo Universitario se basa en este cogobierno de opositores y masistas. Todos ellos se unen para destruir el único orga-

nismo donde las bases tienen voz y voto: la Asamblea.; en los 6 años de gestión de Albarracín no se ha convocado a ninguna. Entre ellos, se reparten los cargos y orquestan elecciones fraudulentas, al mejor estilo masista, para mantenerse en el poder. Un ejemplo claro de esto fueron las elecciones a la FUL del año pasado, donde el frente del masista Álvaro Quelali hizo un escandaloso fraude y tuvo el apoyo político de Albarracín. A pesar de las impugnaciones, pruebas, videos y audios presentados, el rector y su Consejo Universitario hicieron oídos sordos y acreditaron a los masistas. Otra expresión de este cogobierno es el apoyo del rector a los directores masistas de cada carrera y facultad, como el caso del Director de Comunicación Social, miembro del Partido Comunista servil a Evo Morales, que también busca su reelección y tiene la venia de Albarracín. En el mes de junio, este Director designó un

comité electoral a su favor en una reunión de su frente político, ni si quiera guardó las formas, atentando así contra la democracia universitaria. Pero, el Consejo Universitario del rector legalizó su maniobra. El MAS quiere acabar con la Autonomía universitaria, para ello, la policía está dentro de la universidad. Albarracín junto a cada decano y director han continuado con ese control policial. Así también, el gobierno reduce el presupuesto en educación y el Consejo Universitario aplica esa reducción al margen de las bases. Producto de esta política gubernamental, se viene negando el ingreso a la universidad a los hijos del pueblo trabajador cerrando el curso prefacultativo como viene sucediendo en la Facultad de Sociales. Es urgente recuperar la Universidad y sus organizaciones como la FUL al servicio de los estudiantes y el pueblo trabajador.

# EL MAS Y LOS INTERESES OLIGÁRQUICOS EN EL INCENDIO FORESTAL

En poco más de un mes el fuego ha arrasado con más de 2,4 millones de hectáreas del territorio boliviano, que incluye la Chiquitania, el Pantanal, la Amazonía, Sabanas, entre otras zonas.

Recién 15 días después de propagadas las llamas y luego de que la Gobernación de Santa Cruz declaró desastre departamental, el Gobierno envió a policías para mitigar el fuego con botellas de agua. Una burla ante la gravedad de la situación. Tras la protesta a nivel nacional, se vio obligado a contratar el avión Supertanker. Pero, fue usado como parte de una campaña distractora y electoral. El incendio continuó incrementándose. Mientras, el MAS aseguraba que la situación estaba controlada.

Fueron las peticiones de auxilio de pobladores y voluntarios que a través de redes sociales lograron viralizar la gravedad de la situación, cuando el fuego se propagaba en comunidades y áreas protegidas, como sucedió en El Naranjo, Concepción, el Parque Nacional Otuquis, el Pantanal, San Lorenzo, Aguas Calientes, San Ignacio de Velasco, entre otros.

Las autoridades regionales se vieron obligadas a pedir ayuda. Así, el alcalde de San Ignacio de Velasco, a través del periódico El Deber, denunció que el ministro de defensa sólo fue a pasear por el lugar y que la ayuda del gobierno no llegaba. En tanto, el fuego ponía en riesgo el parque Noel Kempff Mercado. Luego, su homólogo en Roboré informaba en Buena Vista que 200 voluntarios se vieron envueltos por el fuego y casi pierden la vida.

Sin embargo, el oficialismo insistía en sostener que la situación estaba controlada. Un insulto a la inteligencia del pueblo trabajador que sufre las consecuencias del desastre. Al finalizar la noche del 24 de agosto, la población junto a bomberos y voluntarios se manifestaron en Roboré, exigiendo al ministro Quintana declarar Zona de Desastre a la Chiquitania para recibir de una vez la ayuda internacional adecuada a la magnitud de la tragedia. La protesta se multiplicó y exigió la abrogación del DS 3973 y la ley 741 que permiten la quema de monte a la agroindustria transnacional. Evo Morales se negó a hacerlo y solo discursó acerca de una supuesta

“pausa ecológica” en las zonas afectadas; y para desviar más la ayuda, García Linera decía que desde febrero ya se había declarado “emergencia nacional”, que el problema no necesita más acciones que esa. De esta manera, el gobierno permitió que los bosques sigan ardiendo en llamas.

## ¿POR QUÉ AÚN NO SE APAGA EL FUEGO?

La agudización de la crisis económica internacional obliga a la burguesía y oligarquía mundial, dueños de las grandes transnacionales, agroindustriales y petroleras, a intensificar la explotación de la tierra, en formas devastadoras para la humanidad y el planeta. Por ello las áreas protegidas del mundo están en la mira, ya que son fuente de riqueza aún no explotada.

En Bolivia, quien está a cargo de aplicar esa política de saqueo y devastación es el gobierno de Evo Morales. Por ello, se ha empeñado en negar su responsabilidad en los incendios y culpa al cambio climático y de forma ridícula a la “oposición”. Cuando la raíz de la dramática situación que vive el país es su política servil al imperialismo, reflejada en los acuerdos del año 2015, tanto en la cumbre “Sembrando por Bolivia” como en el V Congreso Internacional de Gas y Petróleo, donde expresó su plan de exploración petrolera en siete áreas protegidas.

La primera fue coordinada con agroindustriales bajo el objetivo de ampliar la frontera agrícola. García Linera admitió: “esta reunión es para sentar las bases estructurales de este crecimiento del sector agropecuario”. La cumbre estableció la expansión agrícola de un millón de hectáreas por año proyectando alcanzar los 10 millones para el 2025. El Vicepresidente, refiriéndose a los acuerdos logrados, decía: “son mandatos para el gobierno y lo que tenga que convertirse en ley, decreto o procedimiento, lo vamos a cumplir”. Meses después, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz (CINACRUZ) a través de un estudio identificó zonas agroecológicas de explotación entre las que se encuentra la Chiquitania, el Chaco y El Pantanal, entre otros.

El problema surgió cuando a inicios del

2018 no se logró el compromiso, pues el incremento de hectáreas se aproximaba a las 500 mil, menos de lo acordado en la Cumbre.

En esta gestión, con tal de cumplir con los empresarios privados, se firmó el Decreto Supremo 3973 que autoriza el desmonte en Santa Cruz y Beni; junto a la ley 741 legalizan la quema de zonas boscosas, incrementan la deforestación y ponen en riesgo inminente los parques naturales y áreas protegidas del país.

Por todo esto, el gobierno está dejando arder en llamas el país y se niega a declarar Zona de Desastre para viabilizar una adecuada ayuda internacional que logre apagar los incendios.

## LA SALIDA

Es urgente que trabajadores, obreros, campesinos indígenas y estudiantes luchemos juntos y nos sumemos de inmediato a la movilización iniciada por el pueblo de Roboré, para exigirle al Gobierno la declaración de Zona de Desastre. La primera acción es acabar con el fuego.

Al mismo tiempo, es imprescindible exigir la derogación del DS 3973 y la ley 741, así como la reforestación adecuada de la zona devastada, en pro de la recuperación y protección de nuestras áreas protegidas y pueblos indígenas.

Para garantizar que la devastación no vuelva a ocurrir hay que encarar la lucha por la expulsión de las transnacionales y oligarquía de nuestro territorio, pues son estas las que en complicidad con los gobiernos de turno, acaban con los bosques y saquean nuestros recursos. Luchar porque la producción agrícola esté bajo control de los trabajadores de base, no del imperialismo.

En ese camino, no podemos dejar de lado la lucha por la recuperación de nuestras organizaciones como la COB y la CSUTCB de las garras del MAS, pues son ellas las que deberían encabezar la reivindicación de la defensa de nuestros recursos y el control obrero de la producción, apuntando a la centralización de las luchas como la de los cocaleros (ADEPCOCA), médicos, trabajadores, obreros, indígenas y estudiantes para derrotar la política entreguista del Gobierno.